

# Y un día México se despertó moderno

Lourdes Jaime

Cortés Barragán, José Fernando. *El agro mexicano: ¿siempre lo mismo?*, col. Contextos y Análisis, núm.3, ITESO-CRAS-CRT, Guadalajara, 1993, 132 pp.

García Bedoy, Humberto. *Neoliberalismo en México: características, límites y consecuencias*, col. Contextos y Análisis, núm.2, CRT-ITESO-CRAS, México, 1992, 143 pp.

Mora, Raúl H. *Indicadores de la modernización mexicana*, col. Contextos y Análisis, núm.1, CRT-CRAS-ITESO, México, 1992, 189 pp.

Cual si hablase de la antesala del paraíso, el discurso salinista es el de la modernización a toda costa: modernización económica, modernización del campo, modernización política, modernización de la educación, modernización de las relaciones Iglesia-Estado, modernización, en definitiva, del rostro del país.

La modernización, como el proyecto de nación de Carlos Salinas de Gortari. Reflexionar sobre lo que eso significa es el objetivo de la colección Contextos y Análisis, integrada por tres títulos: *Indicadores de la modernización mexicana*, *Neoliberalismo en México: características, límites y consecuencias* y *El agro mexicano: ¿lo mismo siempre?* Se trata de trabajos interdisciplinarios desarrollados conjuntamente por jesuitas y personas que colaboran con ellos en distintas instituciones, incluido el ITESO. Teniendo como punto de partida el compromiso con los pobres y la búsqueda de la justicia, la idea de la colección es poner de manifiesto

"que el actual proyecto neoliberal mexicano [...] perjudica gravemente a la mayoría del pueblo y privilegia a las clases y fracciones ya privilegiadas de nuestra sociedad, por lo menos a corto y mediano plazo."

Es así que, en el contexto de la cada vez más creciente integración mundial y transnacionalización de la economía, la modernidad mexicana y las del resto de los países subdesarrollados están diseñadas para favorecer al gran capital internacional y a las élites nacionales.

El neoliberalismo -modernidad o liberalismo social, como eufemísticamente se le ha llamado en México- es la versión actualizada del liberalismo en respuesta a la crisis de los setenta y ochenta. El neoliberalismo es concebido como un instrumento antinflacionario al aplicar medidas como "el control de la oferta monetaria y del crédito bancario al sector privado, la reducción del déficit gubernamental, la liberación de los precios [...] y, sobre todo, los topes salariales" (García Bedoy, p. 11). Su respuesta al déficit público es poner alto a la intervención estatal directa en la economía; a las empresas paraestatales se les acusa de ser ineficientes -con la consecuente carga económica para el Estado- y de obstaculizar la *leal* competencia en el mercado interno. El Estado neoliberal debe, pues, limitarse a regular los mecanismos económicos y a dotar al país de la infraestructura necesaria para la producción y los servicios. Se trata de un esquema que privilegia al sector privado en un contexto de libre mercado.

Dentro de la más estricta ortodoxia de los herederos de Smith, que ven en la demanda el elemento determinante del proceso de acumulación, el neoliberalismo "crea seres para el consumo" (García Bedoy, p. 6). Evidentemente, la cuestión es crear, en primer término, consumidores para los productos de las economías desarrolladas. Ello pide la apertura de las economías y mercados del tercer mundo al capital extranjero. Así, la integración de las economías nacionales es sacrificada en aras de la integración internacional, sometándose las economías periféricas a los ciclos y vaivenes de los países metropolitanos. Si se tiene en cuenta que la propiedad de la tecnología de punta y el control mundial de los energéticos se encuentran en manos de las naciones superdesarrolladas, resulta claro que "el proceso de internacionalización de las dinámicas económicas, políticas y culturales es conducido hoy, en exclusiva, por el mundo desarrollado" (Mora, p. 11).

Los ochenta asistieron impávidos a la consolidación del capitalismo internacional, favorecida, además, por la caída del mundo socialista. Sin el freno de los países del Este y con una relación Sur-Sur que, más allá del discurso, ha sido tradicionalmente débil, el mundo industrializado afianzó la penetración y diversificación de sus intereses. La década precedente aparece, entonces, como la década de la constitución de un nuevo tipo de relaciones económicas internacionales, caracterizadas por un poder más compartido y una dinámica multinacional. En oposición al anterior monopolio occidental de la economía, por parte de Estados Unidos, los últimos años han visto la conformación de áreas económicas regionales encabezadas, respectivamente, por Alemania (en la Comunidad Económica Europea), Estados Unidos (en el bloque de América del Norte) y Japón (en la Cuenca del Pacífico). Como paso previo al establecimiento de mercados comunes, un acuerdo de libre

comercio es "un sistema de integración económica que se da entre dos o más países a través de la eliminación de las barreras arancelarias e impuestos, y se establecen las bases para la reducción al máximo de las barreras no arancelarias tales como permisos, licencias, requisitos fitosanitarios y otras regulaciones [...]" (Mora, p.83).

En el marco de esa dinámica internacional, y pese a algunos coquetos del salinismo con la Cuenca del Pacífico, la economía mexicana se está integrando aceleradamente al bloque norteamericano. Ya en 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el país se adscribe al GATT, presionado por Estados Unidos, y comienza a suprimir una serie de medidas proteccionistas en materia de comercio internacional e inversiones. Al año siguiente comienza a hablarse de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, y tres años después, en 1990, Bush expresa su interés de que México se integre al convenio. Comenzaba para el país la cuenta regresiva hacia la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Con el argumento de que la industria mexicana se vuelva competitiva en el mercado internacional, el TLC se ha convertido en el niño mimado de la política económica salinista. En su discurso de toma de posesión, en diciembre de 1988, Salinas de Gortari planteó los tres grandes objetivos de su sexenio:

- El Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida Democrática, o modernización política. Las principales metas en este renglón son la modernización del Estado y las reformas a leyes y procedimientos electorales. El Estado moderno es concebido por Salinas de Gortari como aquél que renuncia a la intervención directa en la economía y se concentra en responder a los reclamos sociales de la población. Así "en los últimos 10 años (de diciembre de 1982 a febrero de 92) se han de-

sincorporado en México 911 empresas [...] y están otras 86 en proceso de desincorporación" (García Bedoy, p. 17).

- El Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la Estabilidad, o modernización económica, que se comenta a lo largo de esta reseña.
- El Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular, o modernización social. El instrumento privilegiado para lograr la modernización social es el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol o Solidaridad), fuertemente cuestionado por la utilización que de él se hace en beneficio de la figura presidencial y como medio para cooptar votantes para el PRI. La existencia misma del programa, dicen sus críticos, "es una confesión implícita del régimen salinista de que el proyecto neoliberal mexicano [...] por su misma naturaleza y dinámica, tiende a empobrecer a los pobres, a los sectores mayoritarios, y a favorecer a los privilegiados, a las élites" (Mora, pp. 64-65). Desde esta postura, el Pronasol es visto como un medio para mitigar los efectos del neoliberalismo y evitar posibles estallidos sociales; no es, ciertamente, un programa que ataque las causas de la pobreza, sino un elemento más de la política económica general.

Seis meses después de la toma de posesión, en el *Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994*, Salinas incluiría un cuarto propósito, vinculado con la "Defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo".

Respecto a la modernización económica, parte central de estas reflexiones, no se pueden negar ciertos logros del sexenio a nivel de recuperación de la economía, si bien éstos benefician básicamente a un porcentaje mínimo de la población nacional, además de ser todavía pron-

to para saber si podrán ser sostenidos en el largo plazo.

Teóricamente, el principal objetivo de la integración de México al TLC es "aumentar las exportaciones con el fin de estimular la inversión [...]; facilitar la transferencia de tecnología, y crear fuentes de empleo productivo" (Mora, p. 85).

Es innegable que las exportaciones han mostrado una tendencia ascendente durante los último dos sexenios, además de que se han diversificado. Las exportaciones no petroleras pasaron de 6.6 mil millones de dólares en 1981, a 15.8 mil millones de dólares en 1991. Sin embargo, existe un desequilibrio exportaciones-importaciones que para el periodo 89-91 produjo un déficit de 12 mil millones de dólares y, por otra parte, esas exportaciones se concentran en pocas empresas transnacionales y unas cuantas nacionales.

También es evidente el incremento en las inversiones, tanto por la llegada de capitales extranjeros como por la repatriación de capitales nacionales. Tampoco en este caso se puede ser triunfalista, puesto que las inversiones que más benefician a la economía de un país son las que se hacen en el sector productivo y generan, por tanto, empleos. En este caso no sucede así, ya que "el sector más dinámico de la inversión extranjera, desde 1991, es el mercado de valores" (García Bedoy, p. 55). Lo mismo ocurre con la repatriación de capitales nacionales: 73% ha regresado al país vía las casas de bolsa.

En el campo del empleo el panorama tampoco es alentador. Aunque no son muy confiables las cifras, se habla de 25% de desempleados respecto del total de la población económicamente activa, lo que significa entre 8 y 9 millones de personas. Otros datos hablan de 12% de desocupados y 40% de subempleados. De cualquier manera, se trata de porcentajes considerables, que muy probablemente se incrementarán como resultado de la firma del



TLC. A la ya importante cantidad de despidos generados por la privatización de paraestatales, se sumarán los desempleados producto del cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, con tecnologías e infraestructura incapaces de competir en el mercado internacional. Aunque hay sectores industriales con crecimiento hasta del 6%, el hecho no es igual en todas las ramas, y a ello se debe agregar que no hay una curva continua en los incrementos.

Para los afortunados con trabajo también se presenta difícil la situación, porque si bien la velocidad en la caída del salario ha decrecido en los tres primeros años del gobierno de Salinas, igual es verdad que los incrementos salariales siguen por debajo de la inflación. Y si los precios están por encima del poder adquisitivo, es obvio que de ahí deriva una contracción del mercado interno. Existe una desaceleración en el aumento del producto interno bruto (en 1991 creció 4.8% respecto del año anterior), aunque el incremento continúa y sigue por delante del crecimiento poblacional.

En materia agrícola y petrolera, el país tiene que resolver cómo van a ser manejados esos sectores en relación con el tema del TLC. El discurso oficial ha sido reiterativo en el

sentido de que el petróleo no entrará en las negociaciones del tratado, pero algunos analistas no piensan lo mismo. La exploración, explotación y procesamiento de hidrocarburos ha sido enarbolada tradicionalmente como expresión de la soberanía nacional; por ello, de su inclusión en el TLC podría derivar una pérdida de legitimidad para el gobierno. Sin embargo, son crecientes las presiones del Senado norteamericano para que nada quede fuera de la mesa de negociaciones; si se considera el papel fundamental que los energéticos tienen actualmente en la situación mundial, parece evidente el interés de Estados Unidos por tener ingerencia en la riqueza petrolera mexicana.

El caso del campo es igualmente preocupante, porque a la histórica carencia de recursos suficientes para el sector y al cada vez mayor distanciamiento entre la sociedad urbana y rural, se suman ahora el proceso de privatización de la tierra y la falta de competitividad del agro nacional respecto del norteamericano y el canadiense. En términos de competencia, el campo mexicano enfrenta desventajas a nivel de inferioridad tecnológica, de recursos disponibles y de política agropecuaria de fomentos y subsidios; ello re-

diñda en altos costos de producción que, según el producto, pueden ser superiores hasta en 300% respecto de los costos agrícolas en los otros dos países.

Ante las fuertes críticas a la acelerada y antidemocrática reforma al Artículo 27 constitucional, Salinas anunció un programa de apoyo al campo. Entre otros, ofreció ampliación y subsidio del seguro para ejidatarios, recursos de Solidaridad para la agricultura y más créditos y solución de carteras vencidas, vía Banrural. Así, la privatización de la tierra y el fin del reparto agrario fueron legitimados discursivamente en aras de la modernización y competitividad del campo. Aunque el ejido no desaparece como forma de tenencia de la tierra, la reforma ciertamente "instaura vías y procedimientos que posibilitan la destrucción del sistema social de la tierra y favorecen la concentración de latifundios en manos del capital nacional y extranjero" (Cortés, p. 74). Muy previsiblemente, los campesinos pobres serán sacados del juego por los grandes grupos agrícolas regionales y nacionales y por los inversionistas extranjeros. Aumentará, entonces, el desempleo y subempleo rural, que en el presente se estima en 40%, y habrá más emigración a Estados Unidos y más *pobreza extrema* para ser atendida por Solidaridad.

En definitiva, la modernización salinista no ha resuelto y sí ha acentuado el principal problema del país: la desigualdad social. Y si no que lo digan las cifras: actualmente 10% de la población concentra 38% del ingreso (García Bedoy, p. 102). Se trata de un modelo de desarrollo que, acorde con los lineamientos del neoliberalismo internacional, privilegia a los grupos económicamente poderosos en detrimento de las grandes mayorías, y acentúa la dependencia del país respecto de los países industrializados, en especial Estados Unidos. ♦